

Allanamientos durante el fin de semana en Villa Francia y otros lugares de la Región Metropolitana: Operativo detona nueva disputa oficialista en seguridad con reclamo del PC-FA al Gobierno

“Montaje”, recuerdo de la dictadura y “represión” fue parte del tono de las críticas usadas para reflejar las aprensiones de Apruebo Dignidad, en particular contra Tohá.

RIENZLI FRANCO Y LORENA CRUZAT

En el oficialismo, una nueva controversia en materia de seguridad dejó al descubierto un operativo en Villa Francia. Del allanamiento, que incluyó también otros lugares, resultó la incautación de armas cortas, largas, de guerra y elementos explosivos, dijo la autoridad (ver recuadro).

Las policías actuaron ante una orden emanada de un tribunal y en relación con una investigación del Ministerio Público, alertó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán; pero pese al argumento, desde Apruebo Dignidad, comunistas y frenteamplistas arremetieron en contra del Gobierno del que forman parte, en particular de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), que consideró “un golpe policial que queremos felicitar” el despliegue desarrollado el fin de semana.

No es la primera divergencia entre las partes en materia de seguridad; antes, la controversia ha estado marcada, por ejemplo, en la tramitación de las leyes de usurpación, Naín-Retamal, que calificaban de “gatillo fácil”. La diferencia podría estar ahora en el tono, en que representantes de Apruebo Dignidad han expresado aprensiones ante un eventual “montaje”, con “represión”, en sitios de Villa Francia, como en su radio y comedor popular.

Los primeros en crispar la discusión fueron parlamentarios del Frente Amplio. “El Ministerio del Interior y el Ministerio Público tendrán que explicar muy bien los motivos de los violentos allanamientos, el sentido de las detenciones que resultaron ilegales y la confiscación a un medio de comunicación. Sin duda, oficiaremos también a Interior. Alguien debe responder por el daño causado”, pidió la diputada Claudia Mix.

Y prosiguieron integrantes de la bancada comunista: Hernán Palma aludió al “brutal allanamiento sin orden judicial suscitado en Villa Francia. ¡Esto solo nos retrotrae a los tiempos más oscuros de la Dictadura!”, escribió en redes sociales; mientras las diputadas del PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro también fiscalizarán el operativo vía oficios. “Tristes y alarmantes registros nos llegan de Villa Francia, donde un violento allanamiento de Carabineros afectó a la radio comunitaria y al comedor popular Luisa Toledo, entre otros sectores (...), a todas luces, parece estar criminalizando el uso de espacios comunitarios”, añadió Ana María Gzmuri, a lo que se sumó Matías Ramírez (PC).



Claudia Mix, diputada frenteamplista.



Carolina Tohá (PPD), ministra del Interior.



Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista.



Incautaciones de armas de grueso calibre, y también arrestos, fueron ajustados a derecho, afirmaron en Carabineros y la fiscalía.

El análisis de los expertos acerca del impasse

Ante la nueva divergencia en el oficialismo, expertos analizan que hay formas de dar cuenta de las diferencias por las vías formales. Para el sociólogo Axel Gallis, el “PC es parte del propio gobierno, entonces tienen que usar los canales correspondientes para pormenorizarse de cuáles han sido los procedimientos y no desvincular de ninguna otra forma las pruebas (...). Más allá de lo simbólico que pueda parecer, hoy en día, en general, las poblaciones, otrora lugares de lucha contra la dictadura, están absolutamente mimetizadas por el narco o el crimen organizado. Entonces, hay que

distinguir bien las lecturas que se pueden hacer en el pasado a lo que es el presente”.

El académico UC Marco Moreno opina que, “estas críticas muestran nuevamente la compleja y difícil relación entre el Ejecutivo y algunos parlamentarios oficialistas que antepone siempre sus agendas personales a la acción colectiva del Gobierno, en un tema tan sensible para la gente como es la actual crisis de seguridad. Las críticas de algunos parlamentarios del PC y del FA intentan construir un relato distinto de la realidad porque lo que se busca es fidelizar públicos (votantes)”.

“Torpeza”

De lo ocurrido en el comedor popular en Villa Francia, y otros puntos de la Región Metropolitana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue particularmente rudo con el Gobierno. En radio Nuevo Mundo, el expresidente puso el acento en que, a su parecer, “este es un tema que no tiene precisión de cuál fue el fundamento que justificó una acción de esta envergadura; yo creo que un hecho como este, se trata de un dispositivo asociado regularmente a lo que fue la represión, la persecución de los luchadores democráticos, etcétera (...)”.

Carmona afirmó que la autoridad debe ser “muy delicada, porque una mala información o denuncia raya en una provocación. La gente tiene el derecho a decir

‘esto es una provocación, esto es un montaje, esto es, de nuevo, memoria histórica’, lo mismo que traumatizó la relación de las autoridades con la convivencia en la base popular. Espero, de parte de la autoridad, del Gobierno, de la ministra del Interior, que exista la absoluta y plena transparencia”.

La crítica de Carmona prosiguió en orden a que, “si tú tienes una información, hay aparatos de inteligencia, hay procedimientos mucho más sigilosos que un dispositivo, que amedrenta no solo al comedor sino que a toda Villa Francia (...). Cuando empieza un despliegue, un control de territorio que realmente estremece y la gente es muy audaz, cuando eso empieza se siente agredida y asume una organización para autodefenderse, o sea, esto pudo haber sido una tragedia de marca mayor si es que las cosas hu-

biesen sido con más torpeza aún; y no estamos amparando la delincuencia”, aseguró Carmona.

SD defiende a Tohá

Ante las recriminaciones de Apruebo Dignidad en contra de Tohá, su sector, el Socialismo Democrático (SD) salió en su defensa: “El día en que la ministra del Interior lidere las diligencias del Ministerio Público, se acaba la democracia en Chile, cuando el Gobierno se entromete en la acción de la fiscalía se rompe el Estado de Derecho, eso pasa en las dictaduras, como ocurre con Maduro y ocurrió con Pinochet; si el presidente del Partido Comunista quiere eso para Chile, nosotros nos vamos a oponer”, rebatió el jefe de los diputados del PPD, Jaime Araya.

El legislador por Antofagasta puso entre sus argumentos, el que nuevamente los comunistas se entrometen en una causa judicial en curso: “Es fundamental que termine con estos cuestionamientos permanentes que hace a las instituciones del Estado, acusa persecución política contra Jadue, en prisión preventiva por corrupción, y ahora una investigación por instalación de bombas, ¿es responsabilidad del Gobierno?”.

También desde SD, el presidente de la comisión de Minería y Energía, Juan Luis Castro (PS), contestó, a favor de Tohá, que “es inaceptable volver a criticar al Gobierno en un tema grave de segu-

Fiscalía defiende detenciones e “investigación seria”

Hoy, dos de los 14 imputados detenidos el sábado por la Fiscalía Metropolitana Sur serán formalizados como los presuntos autores de la colocación de dos artefactos explosivos en una empresa y una patrulla policial, los que no detonaron.

Y si bien la investigación de la fiscalía y el OS9 de Carabineros se centró en esas dos personas indagadas, existe además una causa por la Ley de Control de Armas contra otros imputados que fueron sorprendidos en los domicilios allanados el sábado.

Según los investigadores, este grupo fue arrestado por la gran cantidad de armas que almacenaban en un domicilio de Villa Francia, asociado a un radio local.

El fiscal Claudio Orellana explicó que se debía diferenciar la causa contra los dos implicados en las fallidas explosiones y la otra relacionada al hallazgo de armas en los allanamientos. “Se ha actuado en el marco de una investigación seria, científica, desarrollada por la policía de Carabineros, dirigida por el Ministerio Público, en el marco de la cual, en la medida que se ha ido avanzando en la investigación, se han ido desarrollando una serie de peticiones suficientemente fundadas al tribunal”.

Con todo, y pese a la exposición del Ministerio Público, la jueza del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, descartó la prisión preventiva para nueve de los detenidos y dijo que “no hay satisfacción, ni siquiera a nivel indiciario, del porte o tenencia de las armas”. También cuestionó si las armas estaban de forma “transitoria” en el lugar.

Orellana apeló en audiencia para insistir con la máxima cautelar en el tribunal de alzada. También subrayó la gravedad de los hechos con la incautación de un arsenal. Detalló la recuperación de una pistola Taurus 9 milímetros, otra de calibre 22, también varios revólveres con municiones. Pero lo más grave, reveló, fue el hallazgo de una subametralladora con cargador y escopetas, simples y de cañón doble. También se encontraron piezas “sueltas” de escopetas y un centenar de municiones. Respecto a estas imputaciones surgieron distintos cuestionamientos por la legalidad de los procedimientos (ver nota central).

Sobre ese punto, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán (CS), señaló que “que la sola existencia de estos elementos da cuenta de la importante eficacia de esta acción”.

Como lo de Villa Francia, aduciendo temas de DD.HH. Esto solo demuestra un modo atrinchado de reaccionar, que daña al Ejecutivo en forma pertinaz”.

Lo cierto es que la arremetida del PC y el Frente Amplio, junto con la defensa de Socialismo Democrático de Tohá, revivieron, dicen en el oficialismo, las diferencias en el bloque en materia de seguridad, justo cuando La Moneda se alista a enfrentar otra difícil semana en el Congreso, con varias reformas en tramitación, como el voto en dos días, la previsional y el Ministerio de Seguridad, entre otras.